

Columna



Fernando Bastidas E.

Cuentas que no dieron: el costo de proyectar mal

Comienza febrero y, junto con el receso estival, llegan los balances de 2025, especialmente en un contexto de cambio de gobierno. Aunque en los últimos meses han existido motivos para cierto optimismo – como el repunte del precio del cobre o mejores perspectivas macroeconómicas para el próximo año –, el frente fiscal vuelve a quedar en deuda.

El resultado fiscal, lamentablemente, no fue una sorpresa. A lo largo del año, distintos economistas advirtieron que el déficit efectivo sería mayor al presupuestado, situándolo en torno al 2,5% del PIB. Lo que sí sorprendió fue su magnitud final: un 2,8% del PIB.

A comienzos de año, en el primer Informe de Finanzas Públicas, la Dipres proyectaba un déficit fiscal de 1,7% del PIB. Con el paso de los meses, dicha proyección fue ajustándose – en un proceso marcado por el anuncio de las llamadas acciones correctivas – hasta cerrar el tercer trimestre con una estimación de -2,0% del PIB. Sin embargo, los resultados conocidos en diciembre mostraron un déficit efectivo 1,1 puntos porcentuales mayor al proyectado originalmente. Se trata del tercer año consecutivo en que el Gobierno incumple sus metas fiscales, afectando de manera significativa la credibilidad del país frente a inversionistas y mercados.

Este desvío tiene implicancias adicionales. Todo indica que el déficit estructural será mayor al 2,2% proyectado (y al 1,6% comprometido) e incluso podría ubicarse por sobre el 3% del PIB, según estimaciones de distintos economistas.

En el fondo, el incumplimiento responde a una com-

binación conocida: una sobreestimación de los ingresos y un mayor gasto efectivo. En concreto, la recaudación fiscal creció un 3,5% real respecto de 2024, pero un 3,2% menor a lo proyectado, brecha explicada mayoritariamente por una menor tributación del impuesto a la renta de contribuyentes no mineros.

Más allá del resultado puntual, el problema central es la reiteración de errores de cálculo, a pesar de las anticipadas advertencias de expertos de que el déficit terminaría siendo mayor al presupuestado. Para dimensionar la magnitud, el mayor déficit equivale aproximadamente al presupuesto ejecutado completo del Ministerio de Vivienda o a cerca de tres veces el presupuesto ejecutado de Fonasa en 2025.

Este deterioro fiscal también complica el escenario de la administración entrante, que se ha comprometido a realizar un recorte de US\$ 6.000 millones en los primeros 18 meses. Se trata de un objetivo ambicioso y, en principio, positivo. Sin embargo, el punto de partida se vuelve hoy más exigente y difuso, precisamente por la falta de certezas en las estimaciones de ingresos y por el desgaste acumulado en la credibilidad fiscal.

Si bien las perspectivas para este y el próximo año son más favorables (apoyadas en un mayor precio del cobre y una recuperación de la actividad) confiar exclusivamente en un mejor ciclo sería un error. La disciplina fiscal es un activo que cuesta años construir y que puede perderse rápidamente. Recuperar la credibilidad exige proyecciones realistas y un compromiso real con las reglas que el propio Estado se ha impuesto.

investigador asistente Centro de Estudios Públicos (CEP)